

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN**

RESOLUCIÓN N° ANTAI/AL/106-2021. Panamá, diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

En uso de sus facultades legales y considerando,

Que el numeral 6 del artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, por la cual se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), dispone que la Autoridad tiene entre sus atribuciones, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

Que el numeral 10 del artículo 6 de dicha excerta legal, faculta a esta Autoridad a examinar de oficio o por denuncia pública la gestión administrativa en los diversos entes estatales, a fin de identificar hechos que contraríen dicha normativa, por incurrir en conductas que afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario.

Que en concordancia con lo anterior, el numeral 24 del referido artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, establece que esta Autoridad tiene la atribución de atender los reclamos, quejas y situaciones que afecten la transparencia, la ética y lucha contra la corrupción, y promover ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, consta en este despacho investigación denunciada presentada por los señores [REDACTED] y [REDACTED] en contra de la servidora pública la licenciada [REDACTED] con cargo de abogada en el Ministerio de Educación, sección Panamá-Centro, Departamento de Asesoría Legal, relacionada con supuestas irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público y / o posibles faltas al Código Uniforme de Ética de los servidores públicos.

ANTECEDENTES:

En investigación iniciada por las supuestas irregularidades administrativas y posible infracción a lo dispuesto en el Código de Uniforme de ética de los Servidores

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN**

RESOLUCIÓN N° ANTAI/AL/106-2021. Panamá, diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

En uso de sus facultades legales y considerando,

Que el numeral 6 del artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, por la cual se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), dispone que la Autoridad tiene entre sus atribuciones, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

Que el numeral 10 del artículo 6 de dicha excerta legal, faculta a esta Autoridad a examinar de oficio o por denuncia pública la gestión administrativa en los diversos entes estatales, a fin de identificar hechos que contraríen dicha normativa, por incurrir en conductas que afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario.

Que en concordancia con lo anterior, el numeral 24 del referido artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, establece que esta Autoridad tiene la atribución de atender los reclamos, quejas y situaciones que afecten la transparencia, la ética y lucha contra la corrupción, y promover ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, consta en este despacho investigación denunciada presentada por los señores [REDACTED] y [REDACTED] en contra de la servidora pública la licenciada [REDACTED] con cargo de abogada en el Ministerio de Educación, sección Panamá-Centro, Departamento de Asesoría Legal, relacionada con supuestas irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público y / o posibles faltas al Código Uniforme de Ética de los servidores públicos.

69

ANTECEDENTES:

En investigación iniciada por las supuestas irregularidades administrativas y posible infracción a lo dispuesto en el Código de Uniforme de ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del gobierno Central, donde señalan lo siguiente:

“Primero: El día 19 de junio de 2019, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Instituto Atenea, ubicadas en el barrio de Albrook, ciudad de Panamá, se celebró una reunión de orden académico requerida a dicha institución particular, por los padres de familia del menor [REDACTED] señor [REDACTED] y mi persona [REDACTED] quien también soy su acudiente escolar, y quienes solicitamos al Ministerio de Educación, que en la misma reunión participara por parte de la Dirección de Educación Particular MEDUCA, la licenciada [REDACTED] psicóloga de Inclusión de dicha entidad Estatal, pues denunciarnos que nuestro menor hijo está siendo perjudicado por el centro de estudios privado, Instituto Atenea, en cuanto a su derecho de inclusión y aprendizaje al que por ley tiene derecho; a dicha reunión no se citó a nadie más de dicha institución Estatal.

Aclaro que mi menor hijo [REDACTED] tiene una condición de Autismo Moderado, el mismo asiste con Tutora a las clases regulares del Instituto Atenea y el mismo está en la categoría de educación inclusiva debiendo realizarse las adecuaciones al Currículum, cursando a la fecha y satisfactoriamente el sexto grado escolar.

Segundo: Que aproximadamente a dos horas de haberse iniciado la precitada reunión de orden académico, se incorpora a la misma la abogada [REDACTED] con cédula de identidad [REDACTED] quien se presentó como abogada del MEDUCA con capacidad y representación a nivel Regional (Panamá Metro) y a nivel Nacional, la cual requirió a los demás funcionarios del MEDUCA, presentes en dicha reunión, que le informaran el motivo de la reunión, señalándonos a todos textualmente “yo hablo al final y cierro esta reunión”.....

CUARTO: Que al finalizar la referida, los señores [REDACTED] y [REDACTED] así como [REDACTED] padres y tutora del menor [REDACTED] respectivamente, nos retiramos de la misma, sin embargo en el recinto de reunión permanecieron los funcionarios del MEDUCA [REDACTED] y el supervisor Nacional de Educación Particular, Profesor [REDACTED] y ambos funcionarios escucharon a la señora [REDACTED] dirigirse a la Directora del Instituto Atenea, profesor [REDACTED] dijo “Tienes que sacarlo”, refiriéndose al menor [REDACTED] acto seguido la señora [REDACTED] preguntó dónde solicito que le hagan una evaluación al menor [REDACTED] acto seguido la señora [REDACTED] preguntó dónde solcito que le hagan una evaluación al menor [REDACTED] a lo que la psicóloga de inclusión le mencionó que en el Servicio de Apoyo Educativo (SAE) por sus siglas, a lo que la señora [REDACTED] le dijo “eso está donde mí”.

Mediante Resolución de doce (12) de julio de dos mil diecinueve (2019), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información dispuso iniciar investigación administrativa que nos ocupa; no obstante, la última actuación que consta en el infolio data de veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020).

70

DECISIÓN DE ESTA AUTORIDAD:

En consecuencia, han transcurrido más de tres (3) meses sin que haya efectuado actuación alguna en el proceso administrativo iniciado por denuncia presentada por los señores [REDACTED] y [REDACTED], en contra de la servidora pública la licenciada [REDACTED] [REDACTED] con cargo de abogada en el Ministerio de Educación, sección Panamá-Centro, Departamento de Asesoría Legal.

En este sentido, el artículo 161 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, que regula el proceso administrativo, establece lo siguiente:

“Artículo 161. Paralizado un proceso por causa imputable al administrado, la Administración le advertirá inmediatamente que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad, con archivo de las actuaciones.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la acción del particular, pero los procesos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Declarada la caducidad de la instancia, el proceso no podrá ser reabierto, sino después de transcurrido un año, contado desde la fecha en que se declaró la caducidad”.

En concordancia, el numeral 17 del artículo 201 de la referida excerta legal, define la caducidad de instancia de la siguiente forma:

“Artículo 201. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario:

1. ...

17. Caducidad de la instancia. Medio extraordinario de terminación del proceso, a causa de la inactividad del peticionario después de cumplido el plazo legal respectivo, mediante resolución que así lo declara”.

En igual sentido, el artículo 1103 del Código Judicial, norma de aplicación supletoria al presente proceso en virtud del artículo 202 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, dispone:

“1103. Cuando el proceso se encuentra paralizado por más de tres meses, el juez, de oficio o a solicitud de parte, decretará la caducidad de la instancia. El término se contará desde la notificación del último acto, diligencia o gestión y n correrá mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición legal o judicial. ...”

Del análisis de las precitadas disposiciones legales, se colige que la inactividad de los denunciantes o la paralización del proceso durante el período de tres (3) meses o más, produce la figura jurídica conocida como caducidad de la instancia, cuyo efecto es la terminación del proceso, con el objetivo de evitar la litispendencia indefinida.

De lo anterior, se observa que se tienen cumplidos los presupuestos establecidos en la ley, corresponde decretar la caducidad de la instancia en el proceso que nos ocupa, y ordenar el cierre y archivo del proceso.

Por los hechos expuestos, la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en la denuncia iniciada por los señores [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] en contra de la servidora pública la licenciada [REDACTED] [REDACTED] con cargo de abogada en el Ministerio de Educación, sección Panamá-Centro, Departamento de Asesoría Legal, por supuestas irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público y / o posibles faltas al Código Uniforme de Ética de los servidores públicos.

SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO del expediente correspondiente.

TERCERO: ADVERTIR que, contra la presente Resolución cabe Recurso de Reconsideración, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 299 de la Constitución Nacional.

Artículos 4, 6, numerales 6, 10 y 24, de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013.

Artículos 161; 201, numeral 7, 202 y demás concordantes de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000.

Artículo 1103 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase

EFA/OC/GS


MGTRA. ELSA FERNANDEZ AGUILAR.
Directora General